DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES

No. Expediente: 0945-1PO2-07

I DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA.		
1Nombre de la Iniciativa.	Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública.	
2 Tema de la Iniciativa.	Seguridad Pública.	
3 Nombre de quien presenta la Iniciativa.	Dip. Andrés Lozano Lozano, a nombre de diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.	
4Grupo Parlamentario del Partido Político al que pertenece.	PRD	
5Fecha de presentación ante el	4 de octubre de 2007.	
Pleno de la Cámara. 6Fecha de publicación en la Gaceta	4 de octubre de 2007.	
Parlamentaria.		
7Turno a Comisión.	Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.	

II.- SINOPSIS.

Establecer que toda sentencia que dé término a un proceso, deberá ser leída en audiencia pública previa cita de las partes, las cuales podrán solicitar en ese momento la aclaración de los puntos que no hayan entendido. Decretar el arraigo del indiciado o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica determinada, en los términos y condiciones que las leyes respectivas determinen, que en ningún caso estará bajo el exclusivo control del Ministerio Público, sin que pueda exceder de treinta días, salvo que se trate de delincuencia organizada, en cuyo caso podrá prolongarse por la autoridad judicial y a petición del Ministerio Público, hasta por sesenta días más. Medir la gravedad del delito en función de la pena y no por un listado de delitos como sucede en tratándose de delitos federales. Revisar por parte del Juez cada tres meses en los casos en que se decrete la prisión preventiva, si persiste la necesidad de continuar con dicha medida, sobre todo en tratándose de aquellas personas que no pudieron obtener su libertad por falta de recursos económicos para cubrir la caución que se le haya fijado, o bien de aquellos casos a quienes se impuso esta medida como resultado de los elementos aportados por el Ministerio Público. Facultar al juez para autorizar la compurgación de penas en lugares distintos a aquellos de la jurisdicción en que se cometió el delito solamente en casos de delincuencia organizada vinculada al tráfico ilícito de estupefacientes, psicotrópicos, secuestro o tráfico de armas. Establecer un sistema de justicia con tendencia acusatoria que cambie la forma en que

los tribunales desarrollan el proceso penal, proyectando ese cambio hacia el modo en que los órganos de procuración de justicia realizan la investigación de los delitos y la preparación de las pruebas de la acusación. Establecer que las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio, reserva y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por el interesado aparte del juicio de amparo, hacerlo directamente ante el juez de la materia asistido por un asesor legal quien lo auxiliará en todas las etapas del procedimiento. Crear un fondo de justicia integrado tanto por recursos federales como por recursos locales, las Constituciones y las Leyes Orgánicas de las entidades, así como la obligación de dichos poderes de contar con un Consejo de la Judicatura integrado por siete miembros, de los cuales 3 serán nombrados por el Tribunal Superior de Justicia, 3 por el Congreso del estado, de los cuales uno será elegido de entre los abogados postulantes de mayor prestigio en la entidad y 1 por el Poder Ejecutivo, prohibiendo que el Presidente del Tribunal sea también el presidente del Consejo.

III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD.

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la materia se sustenta en la fracción XXX del artículo 73, con relación al artículo 135, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV.- ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR.

En el texto que se propone, se sugiere lo siguiente:

- > Incluir el fundamento legal en que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia que se propone.
- > Señalar con puntos suspensivos el cuarto párrafo del artículo 14, a efecto de que no se entienda como derogado.
- Aclarar el sentido de la reforma al párrafo primero del artículo 18 señalada en el artículo de instrucción. Igualmente, verificar las reformas y adiciones señaladas en el artículo de instrucción, respecto al artículo 116.

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que son los siguientes:

Ser formulada por escrito, tener un título, contener el nombre y firma de la persona que presenta la iniciativa, una parte expositiva de motivos, el texto legal que se propone, el artículo transitorio que señala la entrada en vigor, la fecha de elaboración y ser publicada en la Gaceta Parlamentaria.

V CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE.	
TEXTO VIGENTE	TEXTO QUE SE PROPONE
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
	Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de justicia penal y seguridad pública Único. Se reforman los párrafos segundo, quinto, séptimo, octavo y noveno del artículo 16; el primer párrafo del artículo 18; el primer párrafo del artículo 20, así como el primer párrafo y las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del aparatado A, y el primer párrafo del apartado B, de ese mismo artículo; el primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del artículo 21; la fracción III, los párrafos primero y segundo del artículo 116. Se adicionan un quinto párrafo al artículo 14 constitucional; un décimo segundo párrafo al artículo 16, recorriéndose los actuales en su orden subsiguiente; un quinto párrafo al artículo 17; se agregan seis párrafos al artículo 18, recorriéndose los actuales en su orden subsiguiente; las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX al primer párrafo del artículo 20 y un párrafo segundo y tercero a la fracción IX y una fracción XI al apartado B de ese mismo artículo; un quinto párrafo, recorriéndose los actuales en su orden subsiguiente al artículo 21; un segundo, tercero, quinto y sexto párrafos del artículo 116 recorriéndose los actuales en su orden subsiguiente; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.	Artículo 14

	Toda sentencia que dé término a un proceso deberá ser leíd
No tiene correlativo	en audiencia pública, una vez citadas previamente las partes las cuales podrán solicitar en ese momento la aclaración de lo puntos que no hayan entendido.
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento.	
judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena	No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autorida judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que l ley señale como delito, sancionado cuando menos con pen privativa de libertad y obren datos suficientes que haga probable su existencia, según la descripción contenida en la ley y hagan suponer fundadamente que el inculpado cometió participó en la comisión del delito.
	Sólo en caso de que los plazos anteriores sean insuficiente
	para la integración de la averiguación previa que se inició con
pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no	⊪detenido v exista el riesgo fundado de que el imputado pued

se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, sustraerse a la acción de la justicia, la autoridad judicial responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su podrá, a solicitud del Ministerio Público, decretar el arraigo del indiciado o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica determinada, en los términos y condiciones que las leves respectivas determinen, que en ningún caso estará bajo el exclusivo control del Ministerio Público, sin que pueda exceder de treinta días, salvo que se trate de delincuencia organizada, en cuyo caso podrá prolongarse por la autoridad judicial y a petición del Ministerio Público, hasta por sesenta días más. El Ministerio Público deberá informar al juez cada quince días sobre el avance de la investigación y si siguen existiendo las razones que lo motivaron. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por Ningún indiciado podrá ser retenido por el ministerio público por será sancionado por la ley penal.

inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas

más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su más de cuarenta y ocho horas, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. En los casos de detención o retención, la autoridad deberá informar verbalmente al inculpado de la naturaleza y las razones de aquélla, así como de los derechos que esta Constitución le otorga, independientemente de que el acto de retención deberá ser fundado y motivado en los términos del presente artículo.

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de expedir a solicitud del Ministerio Público y que será escrita, se

y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la que hayan de localizarse o aprehenderse y los objetos que se diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en buscan o han de asegurarse, a lo que únicamente deberá limitarse practique la diligencia.

presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar la diligencia, levantándose al concluirla un acta circunstanciada, en cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o, en su ausencia o negativa, por la autoridad judicial que intervenga en la práctica de la diligencia. El incumplimiento de estos requisitos hará que la diligencia carezca de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar, si este fue obtenido bajo coacción o de manera fraudulenta. Será excusable el cateo que se realice por la necesidad cuanto tenga como propósito salvar de una amenaza actual o inminente a un bien jurídico de mayor entidad que el de privacidad.

intervención, los sujetos de la misma y su duración.

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a de las mismas, excepto cuando sean entregadas a la autoridad petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del judicial o ministerial de forma voluntaria por los particulares Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá que participen en ellas. Exclusivamente la autoridad judicial autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar titular del Ministerio Público de la entidad federativa las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración.

La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, del detenido con su defensor.

cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

No tiene correlativo	El juez valorará el alcance de las comunicaciones privadas que sean presentadas por alguno de los particulares que participen en ellas ante la autoridad ministerial o judicial, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito, sin que haya necesidad de que las demás personas que intervienen en la misma autoricen su utilización.
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.	Artículo 17
No tiene correlativo	Las leyes preverán formas alternativas de solución de los conflictos sociales, siendo la penal la última. En los asuntos del orden penal, en los que por razón del bien jurídico en cuestión y de las implicaciones de su afectación se considere excesiva o innecesaria la aplicación de una sanción penal, también se admitirán soluciones alternativas en cualquier etapa del procedimiento, siempre y cuando se satisfagan o se garanticen los intereses de la víctima y aquellas estén sujetas a la supervisión judicial. Asimismo, las leyes penales establecerán los casos en que el juez podrá autorizar al Ministerio Público, a

Artículo 18.

No tiene correlativo

solicitud fundada y motivada de éste, a que se abstenga de continuar con la acción penal o la acusación, así como los supuestos y las condiciones en que los jueces con resolución motivada, podrán prescindir de aplicar sanción penal o sustituirla por una de menor gravedad, siempre que se trate de delitos no graves.

Artículo 18. Durante el proceso penal podrán imponerse al imputado sólo las medidas precautorias indispensables, con la finalidad de asegurar su comparecencia en juicio, el desarrollo de la investigación y proteger a la víctima, los testigos y la comunidad. La prisión preventiva sólo podrá imponerse cuando otras medidas cautelares menos restrictivas no sean suficientes para garantizar su propósito.

Cada tres meses la determinación de la prisión preventiva, deberá ser validada por el juez comprobando que no se han desvanecido los requisitos del auto de formal procesamiento.

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que cómo máximo fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años. Si cumplido este termino no se ha pronunciado sentencia el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se siga el juicio, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.

Siempre que se trate de delincuencia organizada y de delitos en cuya comisión se utilicen medios especialmente violentos como armas de fuego, explosivos o cualquier otro con efectos similares, habrá lugar a prisión preventiva cuya duración se prolongará por el tiempo en que se haga uso del derecho de

defensa y no habrá lugar a libertad provisional bajo caución.

El juez deberá valorar especialmente, además de lo señalado en el primer párrafo del presente artículo lo siguiente:

I. Si el sujeto ha sido procesado o esta siendo procesado por otros delitos de naturaleza análoga.

II. Si el sujeto ha sido sentenciado por otro delito o delito similar con anterioridad, y

III. Si el sujeto se ha evadido de la acción de la justicia con anterioridad.

La determinación de la ejecución de la pena tendrá en todo caso carácter jurisdiccional, y su observancia estará a cargo de un juez de ejecución de sentencias. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación y la salud, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

Los gobiernos de la federación, de los estados y del Distrito Federal, sujetándose a lo que establezcan las leyes respectivas, podrán celebrar convenios de carácter general para que los sentenciados por delitos de un fuero diverso cumplan su condena en establecimientos penitenciarios dependientes de sus jurisdicciones, bajo condiciones de dignidad para los fines señalados en el párrafo anterior.

No tiene correlativo

No tiene correlativo	El juez podrá autorizar la compurgación de penas en lugares distintos a aquellos de la jurisdicción en que se cometió el delito en casos de delincuencia organizada vinculada al tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos, secuestro y tráfico de armas.
Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:	Artículo 20. Todo proceso penal ordinario se regirá por los siguientes principios o reglas:
No tiene correlativo	I. El proceso penal tendrá por objeto la búsqueda de la verdad o material, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;
	II. A todo inculpado se presumirá inocente mientras no se

declare su culpabilidad mediante sentencia definitiva, dictada dentro de un procedimiento establecido en la lev y en el que se tome en cuenta el principio in dubio pro reo; III. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; IV. Para fines del juicio no se considera prueba ningún elemento que no haya sido desahogado en la audiencia ante la presencia del juzgador. Las pruebas obtenidas por el No tiene correlativo ministerio público y la defensa deberán reproducirse de manera integra ante el juez para que tengan efecto en el juicio. V. El juicio penal se celebrará ante un juez independiente e imparcial que no haya conocido del caso previamente y en el que se presenten las pruebas y argumentos de las partes de manera pública y contradictoria en igualdad de condiciones procesales. VI. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponden a la parte acusadora; independientemente las partes tendrán igualdad, va sea para sostener la acusación o la defensa. VII. No se permitirá la comunicación ex parte y por lo tanto ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos en juicio con cualquiera de las partes sin que este presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción.

A. Del inculpado:

de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohiba tomado en cuenta el principio in dubio pro reo. conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad.

El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado y la

VIII. Sólo serán objeto de consideración de la sentencia los hechos comprobados con base en las pruebas obtenidas de conformidad con la ley y libremente valoradas por el juez. Las pruebas obtenidas por una acción ilegal de la autoridad carecerán de todo valor probatorio.

IX. El juez sólo podrá condenar cuando exista convicción plena de la existencia de la culpabilidad del procesado, en todo caso de duda deberá absolverlo.

A. Son garantías del inculpado:

I. Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la I. Que se le presuma inocente mientras no se declare su libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate culpabilidad mediante sentencia definitiva en la que se haya posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado.

La ley determinará los casos graves en los cuales el juez podrá revocar la libertad provisional;

tortura. La confesión rendida ante cualquier autoridad distinta toda incomunicación, intimidación o tortura. del Ministerio Público o del juez, o ante éstos sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio;

declaración preparatoria.

II. No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será II. A guardar silencio y a que ese silencio no se utilice en su sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal,

III. Se le hará saber en audiencia pública, y dentro de las III. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, de todo valor probatorio. Cuando un inculpado acepte el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la declarar, la autoridad que reciba su declaración estará acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le obligada a probar que se le hicieron saber los derechos que le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este acto su otorga la Constitución, así como que dicha declaración fue libre de coacción. Cuando el inculpado de manera espontánea y libre acepte ante el juez su responsabilidad en un hecho delictivo, la ley establecerá los beneficios que pueden concedérsele, siempre y cuando repare el daño ocasionado.

> El inculpado podrá optar por la apertura del proceso abreviado en los supuestos y modalidades que la ley determine.

IV. a VIII. ...

IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos IX. ... que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una

IIV a VIII.- ...

13

defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; y,

No tiene correlativo

La ley garantizará que el defensor de oficio desempeñe su cargo con autonomía e independencia y por ello procurará que sus emolumentos no sean menores a los que por ley corresponden al representante social.

La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba preconstituida, que por su naturaleza requiera desahogarse antes de juicio. En caso de delincuencia organizada o de casos en los que se presuponga la amenaza a los testigos, la ley establecerá la manera en que las declaraciones de testigos y víctimas se hagan, y los casos en que los testigos cambien su declaración y se presuma fundadamente que ello es debido a una amenaza, el juez podrá tomar en cuenta la declaración rendida ante el Ministerio Público siempre y cuando sea verosímil y se encuentre confirmada por otros medios de prueba.

Las garantías previstas en las fracciones I y IX también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan. Lo previsto en la fracción II no estará sujeto a condición alguna. La ley determinará la duración máxima de una averiguación previa que se integre sin detenido, el cuál no podrá exceder en

	ningún caso de los plazos de prescripción, transcurrido ese término se procederá a su determinación.
X. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquier otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo	
No tiene correlativo	XI. A ser indemnizado por error judicial, con cargo al fondo a que se refiere la fracción IV del apartado B de este artículo.
B. De la víctima o del ofendido:	B. Son garantías de la víctima.
I a III	I. a III
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en	
materia de reparación del daño;	

No tiene correlativo

V a VI.- ...

excederá en ningún caso de treinta y seis horas.

un día.

El gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas establecerán en sus respectivas competencias un fondo económico destinado al apoyo de las víctimas, la capacitación y estímulo a los defensores de oficio y a la reparación del daño. Este fondo se integrará con los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales.

V. a VI. ...

Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. La autoridad administrativa, en los términos que establezcan las leves de justicia comunitaria podrá imponer multa y arresto 60 días de arresto. El procedimiento que se contenga en dichas leyes garantizará que el juez tenga independencia e imparcialidad y se respetarán los principios de publicidad, contradicción y oralidad, de derecho de defensa y de inocencia, y establecerá las medidas restrictivas y cautelares para la protección de los derechos de los ciudadanos y la comunidad.

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

del equivalente a un día de su ingreso.

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

jurisdiccional en los términos que establezca la ley.

Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio, desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía reserva y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional v en caso de que el órgano competente determine que existen elementos suficientes para el ejercicio de la acción penal, el interesado podrá hacerlo directamente ante el juez de la materia asistido por un asesor legal quien lo auxiliará en todas las etapas del procedimiento, en los términos que establezca la ley.

Internacional.

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en En ningún caso en que la autoridad judicial autorice a un cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal particular el ejercicio de la acción penal habrá lugar a la prisión preventiva.

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el ... Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se coordinarán en los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública.

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su Artículo 116. ... ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse

dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I y II.- ...

tribunales que establezcan las Constituciones respectivas.

No tiene correlativo

condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes por recursos federales como recursos locales las Constituciones

I. a II. ...

III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los III. Para garantizar la independencia de los poderes judiciales se establecerá un fondo único que se integrará con aportaciones federales y locales.

> Los presupuestos de los Poderes judiciales federal y local se integrarán en un fondo único garantizando la independencia financiera de los mismos. A tal efecto dentro del presupuesto de egresos de la Federación se considerarán las asignaciones que cada año deberán suministrarse a dichos poderes. Los Estados y el Distrito Federal podrán hacer aportaciones adicionales a sus poderes judiciales.

> Las asignaciones de los recursos del fondo a que se refiere el párrafo anterior a cada uno de los poderes judiciales se realizará con base en principios de distribución racional de conformidad con los criterios que establezca la ley que para el efecto se promulgue.

La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de La independencia e imparcialidad de los magistrados y jueces sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las deberá estar garantizada por la federación, a través de la Leves Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las creación de un Fondo de Justicia que estará integrado tanto sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.

designación.

Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Los consejeros durarán en el cargo cinco años y uno de ellos y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por Presidente del Tribunal lo sea también del Consejo. su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo ... que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidad de los Servidores Públicos de los Estados.

Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración ... adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.

IV a VII.- ...

y las Leyes Orgánicas de los estados.

Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, Los poderes judiciales contarán con un Consejo de la deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V Judicatura que estará integrado por siete miembros, de los del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados cuales tres serán designados por el Tribunal Superior de las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su **Justicia, tres por el Poder Legislativo, de los cuales uno deberá** equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus ser elegido dentro de los abogados postulantes y uno nombrado respectivos Estados, durante el año previo al día de la por el Poder Ejecutivo integrado por tres representantes del Poder Judicial, quienes deberán cubrir los requisitos que las leves locales establezcan.

Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre será nombrado presidente por mayoría de votos, las leyes de la aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia materia que se expidan establecerán la prohibición de el

IV. a VII. ...

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor a los trescientos sesenta y cinco días siguientes al de su publicación en el *Diario Oficial de la Federación*.

Artículo segundo. Las legislaturas de los estados establecerán en las leyes que expidan para la aplicación de la presente reforma una aplicación progresiva en cada una de sus jurisdicciones, para que en un plazo no mayor a siete años se modifique el procedimiento en los estados y el Distrito Federal.

El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados y del Distrito Federal, deberán destinar los recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal, las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y en los presupuestos sucesivos, este presupuesto deberá destinarse al diseño de las reformas legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de la infraestructura y la capacitación necesaria para jueces, agentes del Ministerio Público, defensores públicos v particulares, policías y peritos. Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto se creará una comisión ejecutiva con representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, así como de las Conferencias de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de presidentes de tribunales, para impulsar la reforma de los sistemas de justicia penal de la federación, los estados y el Distrito Federal.

Esta coadyuvará y apoyará a las autoridades locales y federales, cuando así se lo soliciten. Se informará de los avances de la reforma al Congreso de la Unión.
Las garantías relativas al principio de inocencia, a la prisión preventiva, entrarán en vigor a los tres meses de la publicación de este decreto las reformas tanto a nivel federal como de las entidades federativas.

LAL